

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero 12 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por el C. Agustín Olivera, contra el C. Gefe político del Distrito de Tlacolula, que le consignó al servicio militar.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que ha visto con detenimiento y reflexion, la solicitud de amparo formulada por Agustín Olivera, de Tlacolula, consignado al 5º batallon de línea, por el C. Gefe político de aquel Distrito.

Es fuera de toda duda, que la ley de 17 de Mayo último, estableció como requisito previo para que alguno fuera consignado al servicio de las armas contra su voluntad, la calificación de una junta presidida por el síndico del ayuntamiento respectivo, y compuesta de cuatro personas nombradas por esta corporación.

Existe la calificación hecha respecto del quejoso; pero consta que los cuatro individuos de la junta, fueron nombrados por el presidente municipal y no por el ayuntamiento de Tlacolula, según lo justifica la copia auténtica del acta y comunicacion que presentó el peticionario como prueba.

Una vez que la junta no tuvo origen legal, sus actos no tienen validez; y tanto importa que Agustín Olivera haya sido calificado por una junta de ilegal procedencia, como que no se le hubiera calificado de ninguna manera.

La garantía otorgada por la parte primera del art. 5º de la Constitución Federal, no fué suspensa sino en los casos y previos los requisitos marcados por la ley citada de 17 de Mayo del corriente año. Si lo prescrito por la ley no se ha observado, es claro que no puede ella invocarse, y que procede el amparo que Olivera solicita por violacion de la garantía expresada del referido art. 5º constitucional.

La circular núm. 7 del gobierno del Estado, que cita el C. Gefe político de Tlacolula en su informe, no tiene ni puede tener aplicacion en el caso. Las garantías constitucionales no se suspenden por resoluciones de los gobiernos de los Estados, sino solamente por el presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobacion del Congreso general, y en los recesos de este, de la diputacion permanente, en los términos del art. 29 del Pacto Fundamental de la nacion.

Fundado en lo expuesto, el Ministerio fiscal concluye pidiendo: que se conceda al C. Agustín Olivera, el amparo que solicita.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 14 de 1872.

Es copia de su original que obra en el juicio respectivo á que me remito.

Oaxaca, Diciembre 14 de 1872.—*José María Ballesteros.*

SENTENCIA del ciudadano juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 17 de 1872.—Visto el presente juicio promovido por el C. Agustín Olivera, solicitando amparo y proteccion contra la

providencia del C. Gefe político del Distrito de Tlaxolula, que le consignó al servicio de las armas en el 5º batallón de línea, residente en esta ciudad: visto el informe de la autoridad política: lo pedido por el C. Promotor fiscal y todo lo demas que ver convino. Considerando: que en el término de prueba señalado á petición del expresado C. Promotor, el quejoso probó con los dichos de tres testigos, que sostenia á su madre viuda y muy avanzada de edad: que si bien de la copia de las diligencias practicadas por la junta calificadora de Tlaxolula, y remitida á este Juzgado por el C. Secretario del Superior gobierno del Estado, y que corre á fojas 14 y 15, consta que la expresada junta declara al quejoso fuera de las excepciones de la ley de 17 de Mayo último, tambien de estas mismas diligencias aparece que tal junta funcionó sin carácter legal, por haber sido nombrada por el C. presidente municipal y no por el ayuntamiento de la localidad, como lo previene la base 2ª del art. 2º de la ley de 17 de Mayo citada, por cuyas circunstancias el quejoso se considera en la excepcion de la ley referida, y en el pleno goce de la garantía que invoca; en consecuencia, la Justicia Federal ampara y protege al C. Agustín Olivera, contra la providencia del expresado Gefe político de Tlaxolula, que al consignarle al servicio de las armas, ha violado en perjuicio del solicitante la garantía que concede el art. 5º de la Constitución General de la República. Hágase saber: sáquense los testimonios para la publicación de ley: y fecho, remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Union, para su revision.

El C. Lic. Joaquin Mauléon, juez de Distrito, lo decretó y firmó definitivamente juzgando.—Doy fé.—Joaquin Mauléon.—Rodolfo Sandoval, secretario.

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, Diciembre 23 de 1872.—Rodolfo Sandoval, secretario.

#### EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia

México, Febrero 6 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por Agustín Olivera, contra el Gefe político de Tlaxolula, que lo consignó al servicio de las armas, y considerando: que el quejoso ha probado que mantiene madre viuda: que en el expediente aparece que en su consignacion al servicio militar se infringió la ley de 17 de mayo último: que esa consignacion fué contra la voluntad de Olivera; y por lo mismo, que se ha vulnerado en su persona la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitución Federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, el 6 de Diciembre último, por el juez de Distrito de Oaxaca, que declara: que la Justicia Federal ampara y protege al C. Agustín Olivera, contra la providencia del expresado Gefe político de Tlaxolula, que al consignarle al servicio de las armas, ha violado en perjuicio del solicitante la garantía que concede el art. 5º de la Constitución general de la República.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Vo-

*lasco.—M. Anzu.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.*

Son copias que certifico. México, Febrero 12 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.*

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el Lic. D. Félix Vergara Lope, en representación de D. Juan Nepomuceno, y de D. José F. Revilla, contra la 2ª Sala del Tribunal Superior de ese Estado, por haber dictado un auto en el juicio que los interesados siguen, contra la Sra. Dª Trinidad R. de Prieto, sobre entrega y posesión hereditaria de los bienes de D. Juan Revilla.

#### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

Si el C. Félix Vergara Lope, usando de la facultad que le concede el art. 390 de la ley de procedimientos vigente en el Estado, radicó ante la 2ª Sala del Superior Tribunal de Justicia, el juicio á que alude en su escrito peticionario; es evidente que el estarse abocando el conocimiento de dicho negocio, en apelación, otra Sala y otros Magistrados, es estarse violando las garantías de que se queja el solicitante. Por tal motivo, y con fundamento del art. 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, el Promotor fiscal, pide á la integridad de ese Juzgado, se mande suspender el acto que se reclama.

Pachuca, Octubre 24 de 1872.—*M. Sanchez.*

Es copia que certifico. Pachuca, Diciembre 3 de 1872.—*F. Briseño.*

#### OTRO pedimento del C. Promotor Fiscal.

O. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el diez y

ocho del mes próximo pasado, el Lic. Félix Vergara Lope, como apoderado de los CC. Juan N. y José F. Revilla, presentó al Juzgado de su digno cargo, un ocurso, manifestando: que en el juicio que en grado de apelación, sigue ante la 2ª Sala del Tribunal de Justicia de este Estado, contra la Sra. Dª Trinidad R. de Prieto, sobre entrega y posesión hereditaria de los bienes del finado D. Juan A. Revilla, se ha pronunciado un auto por Magistrados que no son los que estaban conociendo del negocio, y por lo mismo, que no siendo estos, el Tribunal establecido con anterioridad por la ley, ni tener jurisdicción para determinar en él, al haberlo hecho, violan en la persona de los poderdantes las garantías que otorga el artículo 14 de la Constitución general. Visto el primer informe, que es el único que corre agregado á fojas 5 y 6 de los autos; el estado que estos guardan, es el mismo que tenían antes de que fuera suprimida la 2ª Sala en que se radicaron. Según el mismo informe, el 12 de Setiembre último se le entregaron los autos al Lic. Vergara Lope, por seis días, para que expresara agravios; el veinticinco, el Lic. Mariano Navarro, en representación de la Sra. Prieto; presentó un escrito acusando rebeldía, y pidiendo se sacaran los autos del poder de la parte contraria, y por último, el veintiseis del propio mes, recayó un auto de la mencionada 2ª Sala de toda conformidad con lo pedido por el apoderado de la Sra. Prieto, y que es el que actualmente se trata de cumplir.

Esto supuesto, el Promotor considera que no se ha violado el art. 14 constitucional, pues como está demostrado, y consta del expediente, el auto á que se refiere el solicitante, es el mismo que se proveyó por la mencionada 2ª Sala, antes de que se hubiese dado una nueva organización al Superior Tribunal de Justicia.

Así pues, este Ministerio, fundado